



MINISTERIO  
DE ASUNTOS ECONÓMICOS  
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SUBSECRETARIA



Con fecha 1 de febrero de 2023 tuvo entrada en la Unidad de Información de Transparencia de este Ministerio solicitud de acceso a la información pública formulada por [REDACTED] al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. La solicitud quedó registrada con el número 001-00076386.

El texto de la solicitud de información es el siguiente:

*“¿Dónde vive la ministra de Economía? Además, si es una casa ofrecida por el Estado, ¿qué gastos cubre el Estado en estos casos y cuáles no?”*

La pregunta se recibió en la Subsecretaría del Departamento el día 2 de febrero de 2023, fecha a partir de la cual comienza a contar el plazo de un mes para su resolución previsto en el art. 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

Una vez analizada la solicitud, esta Subsecretaría resuelve conceder el acceso parcial a la información solicitada por [REDACTED] indicándole que este Ministerio no tiene ninguna vivienda oficial de su propiedad, si bien tiene asignado el uso de parte de un inmueble de dominio público de los previstos en el artículo 5.3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Este Departamento sufraga el suministro de electricidad que supone el uso de la vivienda oficial, así como los gastos derivados del mantenimiento del ascensor y los impuestos asociados a la mencionada vivienda.

En cuanto a la información relativa a la ubicación de la vivienda, esta Subsecretaría considera que se trata de un supuesto en el que concurre una de las causas previstas en el art. 14 de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. No se proporcionan los datos de la ubicación exacta de la vivienda por razones de seguridad nacional, limitándonos a informar que se encuentra en el término municipal de Madrid.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno). En ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.

LA SUBSECRETARIA

Amparo López Senovilla